

Micrófonos cerrados: El paro de octubre en la prensa

José Miguel Cabrera Kozisek

Un diálogo televisado a nivel nacional es una forma atípica de solucionar un conflicto, pero fue así como se tuvo que hacer el 13 de octubre de 2019 en Ecuador. Que esa negociación fuera transmitida en señal abierta tiene una explicación: el movimiento indígena no confiaba en la comunicación oficial ni en la prensa, que durante los diez días que duró el paro, se dedicaron a deslegitimar su protesta.

Cuando Lenín Moreno, presidente de Ecuador, anunció el 1 de octubre que eliminaría el subsidio de los combustibles, el gremio de los transportistas convocó a un paro nacional que luego sería sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Y la prensa hizo sentir de qué lado estaba.

Los medios de comunicación tradicionales en Ecuador ‘cumplían’ con informar. Pero informar no siempre es decir la verdad. El periodista y lingüista español Álex Grijelmo tiene un libro dedicado a esto, *La información del silencio: Cómo mentir diciendo la verdad*. Ahí, el creador de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) sostiene que «no es lo mismo silenciar algo que nuestro interlocutor desconoce, que omitir algo para que el receptor de nuestro mensaje lo infiera».

Las movilizaciones ocurrían porque el incremento del precio del combustible pone en riesgo la producción agrícola, para la que se requiere el uso de maquinarias, y el decreto presidencial 883 que eliminaba el subsidio no proponía una alternativa. Pero los medios se esforzaron por mostrar la protesta como un obstáculo para el trabajo, como generadora de violencia, y advertían de los destrozos en bienes patrimoniales. La policía exageraba el uso de la fuerza, pero estos hechos eran difundidos en su mayoría a través de videos de redes sociales que mostraban cómo lanzaban gas pimienta a personas que grababan, cómo golpeaban gente que ya no se podía levantar y cómo lanzaban [bombas lacrimógenas](#) en las universidades Católica y Politécnica Salesiana, que funcionaban como centros de acopio humanitario, y donde miembros del movimiento indígena descansaban y recibían atención médica.

El 4 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya advertía en un [tuit](#) su preocupación «por el uso excesivo de la fuerza por la policía en #Ecuador, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales». Sin embargo, estos hechos que inundaban las redes sociales solo fueron abordados por los medios después de que la ministra del Interior, María Paula Romo, hiciera referencia y pidiera disculpas públicas en una rueda de prensa.

Mientras ocurrían las manifestaciones, la web de Teleamazonas destacaba que una estación de bicicletas era víctima del vandalismo. Por su parte, el medio público El Telégrafo buscaba conexiones entre miembros de la Conaie y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de una pugna entre partidos políticos por la permanencia de su presidenta, Diana Atamaint.

De hecho, revisando el día a día en las noticias de *El Telégrafo*, los titulares —que llegaban a afirmar que el toque de queda se había desarrollado— estaban siempre planteados desde el punto de vista del presidente, de los ministros, del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, e incluso de un comité cívico autoconvocado. Pero no había ningún intento de entender las cosas desde el lugar del movimiento indígena.

Un personaje como Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, era consultado por varios canales. En TC Televisión, Arosemena advertía que «los comerciantes estamos tomando nota de qué tipo de colectivos están incitando a este tipo de actos vandálicos», y advertía que iniciarían demandas por «afectaciones a la propiedad privada». Otro día era invitado al programa Veraz, de Carlos Vera en Canal Uno, donde decía que «hay que volver a trabajar y dejar de paralizar. Es violencia económica andar bloqueando la actividad productiva». Arosemena, que también estuvo invitado a un programa de entrevistas en Ecuavisa, era un personaje indirecto de esta situación con mucho más espacio que los miembros del movimiento indígena o cualquiera que se opusiera a las medidas.

Obviar la voz de los manifestantes impide una comunicación plural. Y esto es un problema, no solo porque no es justo, sino porque al renunciar al contraste de posiciones, se renuncia también a crear un relato cercano a la realidad. De hecho, oponerse a las medidas o criticar al gobierno o a cualquiera que lo apoyara era material impublicable. En Gamavisión, una periodista le retiró el micrófono a una persona que empezaba a decir que «Nebot es mentiroso»; en RTS ocurrió lo mismo cuando otro hombre usó también la palabra ‘mentiroso’, pero esta vez refiriéndose al gobierno. Y una reportera de

Ecuador TV terminó por cortar la entrevista luego de intentar convencer sin éxito a un señor de que la militarización de las calles era por su seguridad.

Sin embargo, sí había micrófonos para quienes opinaban que los indígenas eran vagos que no dejaban trabajar, una visión que, más allá de alinearse con una sola postura de la historia, alimentaba también la representación racista del indio incivilizado. En la señal de Ecuavisa, una señora que asistía a una ‘marcha contra la marcha’ calificaba a los manifestantes de [malandros, indios y maleducados](#), como reseña Inna Afinogennova, de Actualidad RT, versión en español de Russia Today.

A los medios de comunicación masivos de Ecuador es fácil ponerlos en evidencia. Y eso no es bueno, ni siquiera para quienes mantienen una postura crítica hacia ellos, porque los medios tienen una función esencial: permitir a su audiencia tomar mejores decisiones. Y cuando escogen una postura a la cual adherirse, no solo privan a su audiencia de la información necesaria para tomar mejores decisiones, sino que destruyen su propio negocio: la credibilidad.

En esa especie de consenso tácito, los medios publicaban notas en las que Moreno hablaba de diálogos en marcha que ya estaban «[dando frutos](#)», pero Quito seguía paralizada, al punto de que fue necesario trasladar la capital a Guayaquil por una semana.

Durante todo ese tiempo se alimentaba el racismo en la población ecuatoriana occidentalizada. Los periódicos resaltaron que apenas el 7 % de la población ecuatoriana se identifica como indígena, y con esa base se empezó a cuestionar que ese pequeño porcentaje de la población se creyera con derecho a

hacer exigencias macropolíticas. Se hizo popular la frase: «A mí no me representan». Amparado en esa cifra, Martín Pallares, de *4 Pelagatos*, dijo que los indígenas «se atribuyen un poder de representación que no tienen» en [una entrevista](#) que le hicieron en un medio español.

El país llevaba ocho días en paro cuando el diario *Expreso* puso este titular en su [portada](#): «El país camina a la calma, los indígenas a la violencia». Tal como ocurre con los movimientos feministas, se les cuestiona más las formas que las demandas. Pero, además, es una manera —por decir lo menos— nada elegante de abordar las cosas.

La nota de *Expreso* destacaba que «al menos el 70 % del territorio nacional vuelve a la normalidad», en función de la cantidad de provincias sin movilizaciones ni control policial. Pero eso no significaba nada, pues la situación política seguía igual: Quito estaba tomada y Guayaquil, capital temporal, mantenía cerradas sus rutas de acceso.

Un día antes, ocho policías y decenas de periodistas habían sido retenidos por la Conaie y obligados a transmitir en sus dispositivos una serie de discursos de los líderes indígenas. Aunque hubo reporteros que dijeron haber estado ahí por voluntad propia, hubo otros que no. Uno de esos fue Freddy Paredes, de Teleamazonas, quien recibió un pedrazo en la cabeza al salir, y cuya historia recibió mucha más cobertura que las once muertes de manifestantes indígenas ocurridas durante las movilizaciones.

¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando la policía apresó al escultor guayaquileño Tony Balseca? El artista había salido a marchar con un cartel que mostraba a un guerrero huanca-

vilca sosteniendo en sus manos la cabeza de Lenín Moreno. Un video, que no se encuentra en la web de ningún medio de comunicación masivo, muestra cómo un grupo de policías lo levantan y se lo llevan a la cárcel, acusado de incitar al odio. Por marchar con un cartel. Si la misma acción hubiera ocurrido en el gobierno de Rafael Correa, esta nota hubiese tenido muchísimo seguimiento como un ejemplo de la ausencia de la libertad de expresión.

Un conjunto de hechos verdaderos puede formar falsedades si se silencian los otros hechos. Y esto supone un problema profundo que no es solo ético, sino también empresarial. Porque el negocio de los medios de comunicación se basa en qué tan confiables son. Y la confiabilidad, dice Adelino Cattani, «es algo más que evitar una mentira».